

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/389207763>

Un viaje por el nuevo narcoestado del mundo. Por Alexander Clapp (traducción)

Article in *Economist* (London, England: 1843) · February 2025

CITATIONS

0

READS

233

1 author:



[Eduardo Raúl Silva Villavicencio](#)

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Manabí

7 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Un viaje por el nuevo narcoestado del mundo

La droga transformó Ecuador de éxito latinoamericano en zona de guerra.



22 de noviembre de 2024

Por Alexander Clapp¹

Este artículo ha contado con el apoyo del Centro Pulitzer

¹ Traducción libre: Eduardo Raúl Silva Villavicencio, psicólogo clínico por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Relaciones Internacionales con mención en derechos humanos y seguridad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO sede Ecuador. Miembro investigador del Centro de investigaciones: Democracia, Institución y Subjetividad (CriDIS) de la Universidad Católica de Louvain (UCLouvain) en Bélgica y doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la misma universidad. Actualmente es docente y coordinador del Centro de Psicología Aplicada en la Universidad Católica del Ecuador en la sede de Manabí en Portoviejo. Texto original The Economist y Centro Pulitzer
<https://www.economist.com/1843/2024/11/22/a-journey-through-the-worlds-newest-narco-state>
<https://pulitzercenter.org/stories/journey-through-worlds-newest-narco-state>. Se ha respetado el diseño original y tamaño de las fotografías. Ingresado en diciembre de 2024.

Descansando sobre una cresta de la sierra que domina la costa pacífica de Ecuador, Los Bajos es un mísero conjunto de toscas casas de ladrillo entremezcladas con alguno que otro casino. Una colina cubierta de selva se cierne sobre la ciudad; los buitres revolotean por encima de la carretera de tierra sin iluminar que desciende hasta ella a través de matorrales que desprenden un hedor agrio, como el del fertilizante demasiado fresco. Los carteles advierten de que quien sea sorprendido tirando basura en la carretera será multado con 900 dólares, aunque para los habitantes de Los Bajos el problema últimamente no es la basura. Son los cadáveres.

Mercedes Morales, maestra de 45 años y líder de la comunidad, ha escuchado las quejas de los lugareños. El primer cadáver, descubierto hace dos años, era el de un taxista local. Morales calcula que sólo en los últimos seis meses se han encontrado 20 cadáveres en la carretera de Los Bajos. «No, no, más cadáveres que eso», interrumpe su marido, sentado a su lado en una silla de jardín de plástico blanco en su patio de cemento desnudo. «Demasiados para contarlos».

Ambos coinciden en que los cadáveres suelen aparecer por la mañana, cuando los residentes se dirigen a una fábrica de procesamiento de pescado cercana. «Llaman a la policía y se marchan rápidamente», explica Morales. Algunas víctimas son trabajadores inmigrantes venezolanos. Pero la mayoría son ecuatorianos, jóvenes a los que los familiares reconocen en la morgue «por sus tatuajes». A menudo los hombres llevan mucho tiempo muertos cuando llegan a Los Bajos, tras haber sido transportados en vehículos robados que luego son incendiados en las colinas más allá de la ciudad. Pero de vez en cuando los asesinan in situ. «Oímos los disparos por la noche», me dijo Morales. Desde hace un año, los varios centenares de habitantes de Los Bajos han adoptado un toque de queda no oficial: no salen de sus casas después de la puesta de sol ni caminan solos más allá del pueblo.

Para los habitantes de Los Bajos, el problema no es la basura. Son los cadáveres

Los Bajos y sus alrededores fueron en su día el principal productor mundial de sombreros de paja tejidos a mano, mal llamados Panamas después de que Theodore Roosevelt fuera fotografiado con uno puesto mientras recorría las obras del Canal de Panamá en 1906. En la década de 1980, la industria estaba en declive debido al auge de las imitaciones baratas. Los esforzados residentes de Los Bajos tuvieron motivos para esperar un futuro más próspero cuando, en 2007, el gobierno de Ecuador anunció la construcción de una colosal refinería de petróleo y petroquímica en las colinas cercanas. La instalación -el mayor proyecto de infraestructuras de la historia de Ecuador, diseñado para importar 300.000 barriles diarios de petróleo venezolano, refinarlo y exportarlo a toda Sudamérica- prometía traer 25.000 puestos de trabajo a la región.

Nunca se materializaron. En 2019, tras años de retrasos, cesó la construcción de la refinería. Pero en los últimos cinco años, la instalación a medio construir -ahora una extensión vacía de asfalto más grande que Gibraltar- ha atraído otro negocio de importación y exportación. Aproximadamente una vez cada dos semanas, Morales oye el zumbido de avionetas que despegan y aterrizan en la refinería por la noche.

No es ningún secreto lo que están haciendo: transportar cocaína fuera de Ecuador y maletas con dinero en efectivo hacia el país. Y nadie -oficialmente, al menos- les presta atención. En noviembre de 2021, una instalación de radar cercana voló misteriosamente por los aires y nunca fue sustituida. Al estallar una cruenta guerra entre bandas de narcotraficantes por el creciente número de cargamentos de cocaína, los cadáveres putrefactos empezaron a amontonarse en las afueras de Los Bajos. «Antes no era así», me dijo Morales, con la voz entrecortada por la exasperación. «Pero ya nos hemos acostumbrado a todo».





El camino al infierno. La líder comunitaria Mercedes Morales (abajo) vive en Los Bajos con sus hijas (arriba). Hace unos años empezaron a aparecer cadáveres en la carretera de acceso al pueblo (centro).

En los últimos diez años, la cocaína ha hecho que Ecuador pase de ser una de las naciones más estables de Sudamérica -con calles más seguras y un nivel de vida superior al de muchos de sus vecinos- a convertirse en el país más peligroso del continente. El año pasado se registraron más de 8.000 asesinatos. Las víctimas son muy variadas: diez jugadores de voleibol, nueve pescadores de camarones, seis alcaldes, cinco turistas, dos fiscales, un candidato presidencial y el líder de un partido político figuran entre las personas tiroteadas o asesinadas desde 2023. La ciudad industrial de Durán -donde gran parte del aparato gubernamental ha sido secuestrado por mafiosos- puede presumir de ser la capital mundial del asesinato; de media, alguien muere allí cada 19 horas.

En enero de este año, se produjeron brutales motines en las cárceles de Ecuador. Los mafiosos encarcelados se burlaron de los intentos del Estado por controlarlos, metiendo y sacando a sus líderes de las cárceles a su antojo mientras mantenían secuestrados a cientos de guardias. A los pocos días, el presidente del país, Daniel Noboa, de 36 años, vástago de un imperio bananero que había sido elegido tres meses antes, declaró el estado de emergencia y desplegó su ejército en las calles. «Sed valientes», desafió a las bandas. «Luchen contra los soldados».

El éxito del enfoque de Noboa está por verse. Lo que está claro es que la agitación de las bandas ha desfigurado, en menos de una década, a grandes segmentos de la sociedad ecuatoriana, convirtiendo a un país que no ha sabido afrontar adecuadamente su epidemia de delincuencia en uno que puede que nunca se recupere de ella. Desde 2015, casi un tercio de los 3.000 pescadores que una vez salieron de la pintoresca comunidad costera de Jaramijó cada mes para pescar dorados en el Pacífico han desaparecido; obligados a trasladar paquetes en nombre de las bandas, muchos tienden a aparecer meses después de su desaparición en cárceles extranjeras a miles de kilómetros de distancia acusados de narcotráfico. En El Oro, región en la que se cultiva una décima parte del plátano del

mundo, la infraestructura utilizada para transportar la fruta más consumida del planeta se ha reconvertido en un colosal frente de contrabando, convirtiendo la exportación emblemática de Ecuador en sinónimo internacional de contrabando. En la ciudad costera de Manta, un torrente de blanqueo de dinero ha llevado a prohibir los depósitos bancarios superiores a 5.000 dólares, según me dijo Paco Delgado Intriago, fiscal del distrito. En ciudades como Mocache, los sacerdotes han recibido el encargo de enterrar a los mafiosos con arsenales de ametralladoras para protegerlos en el más allá. En la Cooperativa San Francisco -un barrio pobre de Guayaquil, el principal puerto de Ecuador- los gánsters han cortado la lengua a niños para evitar que se conviertan en informantes de la policía.

La agitación de las bandas ha desfigurado, en menos de una década, grandes segmentos de la sociedad ecuatoriana

Y luego está la historia que escuché de un preso reciente, que ahora conduce un popular tren para niños por Guayaquil conocido como el gusanito. Durante cuatro días, el hombre vio cómo, en la celda situada frente a la suya, sus rivales aplastaban los miembros de un gánster con un martillo industrial, le rebanaban los huesos con un hacha y se deshacían de ellos en un vertedero. Mientras tanto, los guardias de la prisión observaban impertérritos.

Es un giro sorprendente y abrupto. Durante décadas, Ecuador, enclavado entre los campos de coca de Colombia y Perú, operó al margen de la industria del narcotráfico.

Ocasionalmente actuaba como punto de partida hacia los mercados del norte, pero la hoja de coca no solía cultivarse allí, ni el país era un gran centro de fabricación de cocaína.

Dos acontecimientos en 2016 cambiaron la suerte de Ecuador. El primero fue el vacío de poder generado por el desmantelamiento parcial del cártel de Sinaloa, con sede en México; su líder, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido como El Chapo, fue extraditado ese año a Estados Unidos. Durante dos décadas, Sinaloa había dominado las rutas de contrabando hacia Norteamérica. Pero la extradición de El Chapo desestabilizó el cártel, creando oportunidades para que mafias lejanas -italianas, serbias, rusas- pasaran de limitarse a gestionar la distribución de drogas en sus propias regiones a controlar ellas mismas las exportaciones fuera de Sudamérica.





Una necrópolis improbable En las colinas cubiertas de hierba de las afueras de Los Bajos se planeó en su día una refinería de petróleo. Las bandas utilizan ahora el lugar para sacar droga del país y deshacerse de cadáveres (abajo).

Ese mismo año se alcanzó un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, la guerrilla marxista-leninista que durante mucho tiempo se había financiado mediante el control del cultivo y el tráfico de coca. El fin oficial de las hostilidades no detuvo tanto el cultivo de coca en Colombia -el año pasado la producción alcanzó el nivel más alto en dos décadas- como lo empujó a los márgenes del país; en 2022, las imágenes por satélite revelaron que la mitad de las plantas de coca de Colombia se habían trasladado al sur, a regiones limítrofes con Ecuador, la mitad de ellas a menos de 15 kilómetros de la frontera.

Pocos lugares podrían haber sido más atractivos para un sistema global de cárteles en desorden. Aquí había un país con docenas de puertos conectados por carreteras en buen estado. Seiscientas millas al oeste, las Islas Galápagos ofrecen una estación ideal de repostaje y distribución para los buques cargados de contrabando. Una industria turística en ebullición y una economía dolarizada ofrecen oportunidades para blanquear ingresos ilícitos. Además, Ecuador está conectado desde hace mucho tiempo a las redes mundiales de transporte marítimo, y cuenta con la infraestructura necesaria para exportar 4 millones de toneladas de plátanos al año a prácticamente todos los países del mundo.

Casi al unísono, organizaciones delictivas de México a Montenegro empezaron a dirigirse a la costa ecuatoriana del Pacífico y a negociar conexiones con más de 20 bandas locales, que históricamente habían luchado por el control de manzanas de ciudades y pequeños pueblos pesqueros. Ahora se presentaba un premio mucho más atractivo: la oportunidad de convertirse en el principal socio local en el tráfico internacional de cocaína, que mueve 100.000 millones de dólares al año. Las bandas empezaron a expulsarse unas a otras de puertos y plantaciones. Algunos heredaron las conexiones de Sinaloa; otros se unieron a una alianza rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación, para expulsar a los vasallos que

quedaban de Sinaloa y matar o convertir a sus miembros. En 2021 fueron asesinadas casi 3.000 personas, y el Estado encarceló a cientos de mafiosos. La diferencia fue mínima. La tasa de asesinatos de Ecuador se duplicó en 2022, y volvió a duplicarse en 2023.

Casi al unísono, las organizaciones criminales de México a Montenegro comenzaron a dirigirse a la costa pacífica de Ecuador.

Me dirigí al sur de Los Bajos. De la niebla tóxica de los suburbios más allá de Guayaquil surgió La Penitenciaría del Litoral, un enorme complejo gris rodeado de vallas azules. Una de las prisiones más grandes de Ecuador, llegó a los titulares internacionales en 2019, cuando los reclusos comenzaron a transmitir en vivo masacres de pandilleros rivales desde dentro de sus muros. En un incidente, murieron más de cien; en otro, se jugó un partido de fútbol con una cabeza cortada.

Fuera del edificio, observé cómo los familiares hacían cola para llevar comida a los que estaban dentro, con bolsas de plástico repletas de botellas de leche y galletas. Cerca de allí, bajo paraguas rojos y amarillos, se apilaban mesas plegables con botes de proteínas en polvo. Una vendedora me dijo que el producto tiene mucha demanda en Litoral, donde es importante ser lo bastante fuerte para defenderse.

Todo tiene un precio dentro de la prisión, donde los guardias -que trabajan en estrecha colaboración con el ejército ecuatoriano- extorsionan habitualmente a los presos. ¿Un pollo asado? 50 dólares. ¿Un plato de arroz? \$40. ¿Una conversación telefónica? Cinco dólares el primer minuto, diez por cada minuto adicional. Los guardias organizan estos servicios y los facturan a la familia del preso. A final de mes, no es raro que las familias se enteren de que deben cientos, incluso miles, de dólares al centro penitenciario. Si la factura no se paga, sus familiares encarcelados son golpeados o asesinados.

Una forma de evitar estos destinos es comprar protección. En el patio de comidas de un centro comercial conocí a un hombre que había pasado diez años dentro de Litoral, tres de ellos dirigiendo informalmente una de sus alas en nombre de Los Choneros, una banda que debe su nombre a un pueblo del oeste de Ecuador; se hizo conocido por organizar siniestros castigos colectivos a violadores de niños. Conocido como el «Gordo» por su corpulencia, llegó al centro comercial con sus dos hijos pequeños. Mientras el mayor rebotaba sobre sus rodillas, Fat Guy me contó que los presos pagaban 50 dólares al mes, que sus familiares introducían de contrabando en la cárcel durante las horas de visita, para estar protegidos de la mayor parte de la violencia. Una parte de este dinero se entrega a los guardias y al ejército, quienes, desde el punto de vista de los reclusos, no ocultan que la creciente población carcelaria de Ecuador es un buen negocio.





Carne fresca. Nuevos reclusos (arriba) llegan a la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil (centro). La prisión es conocida por la brutalidad de sus reclusos y la extorsión a sus familias (abajo) por parte del personal penitenciario.

Hay otra forma de sobrevivir a la vida en el interior. «Los que no pueden pagar [por la protección] -los pobres- son los que se unen a las bandas», explicó el Gordo, partiendo trozos de pan de plátano y dándoselos de comer a sus hijos. El resultado fue la grotesca ironía de la violencia que ahora asola Ecuador: las bandas proliferan a través del mismo sistema penitenciario que se supone que debería aplastarlas. Hoy, las pandillas de Ecuador pueden contar entre sus miembros a casi un tercio de los 33.000 reclusos del país.

Alrededor de 2017 la vida en Litoral empezó a cambiar, afirma el Gordo. A medida que el tráfico de cocaína se apoderaba del país, la población reclusa creció hasta alcanzar varios miles de personas en una cárcel diseñada para albergar solo a cientos. Los pandilleros empezaron a ver la penitenciaría como un refugio. Los asesinatos, los envíos de droga, las alianzas criminales... todo ello podía organizarse con más seguridad desde las celdas que en las calles, donde se libraban guerras territoriales por unas rutas de contrabando cada vez más lucrativas. «Ahora había gánsters que querían estar dentro de la cárcel», me dijo el Gordo. Los presos ricos podían sobornar a los guardias para entrar y salir de contrabando de Litoral en camiones de combustible, que simultáneamente introducían de todo, desde whisky hasta granadas. «Miraras donde miraras, surgían más oportunidades», dijo Fat Guy. «Más libertad y más dinero».

Los gánsteres ecuatorianos, que ahora se cuentan por decenas de miles, pueden haber ganado fortunas astronómicas con la cocaína, pero siguen comportándose como matones callejeros. En contraste con la eficiencia corporativa de los cárteles internacionales en los que aspiran a convertirse, las bandas ecuatorianas siguen siendo operaciones amplias e informales que establecen asociaciones oportunistas entre sí. La afiliación es fluida. La única marca real de lealtad es el tatuaje. (Una corona para los Latin Kings; un tigre para Los Tiguerones.) Aunque

se han abierto paso con éxito en el mundo del narcotráfico globalizado, los gánsteres ecuatorianos siguen enriqueciéndose indiscriminadamente, manejando los hilos logísticos de envíos de cocaína de miles de millones de dólares y robando teléfonos móviles a turistas estadounidenses con el mismo fervor.

En Ecuador, las bandas cultivan deliberadamente el caos como el camino más rápido hacia la riqueza y la atención.

Esto hace que Ecuador sea inusualmente peligroso. En lugares como el sur de Italia, las mafias no suelen tolerar formas menores de delincuencia callejera. Pero en Ecuador las bandas cultivan deliberadamente el caos como el camino más rápido hacia la riqueza y la atención. Manejan cuentas de TikTok que muestran tiroteos en las aceras y canales de YouTube con vídeos musicales protagonizados por pesos pesados ataviados con relojes Armani y gafas de sol Versace. Para intimidar a sus rivales e impresionar a sus socios internacionales, organizan actos de violencia pública: en medio del caos de enero, una banda de matones irrumpió en un canal de televisión de Guayaquil durante la grabación de las noticias de la noche, tirando a los periodistas al suelo en directo y agitando fusiles de asalto ante las cámaras. «Está muy desorganizado. Un puñado de bandas tiene conexiones con mafias internacionales. Pero el resto no sabe lo que hace ni cuál es su posición en los mercados globales», me dijo Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. «Por eso vemos el grado de violencia que vemos: estas organizaciones intentan ganar legitimidad ante sus superiores globales».

El barrio guayaquileño de Nueva Prosperina puede presumir de ser el municipio más mortífero del mundo por habitante. Unos días antes de mi llegada, el análisis de los casquillos recogidos en 27 escenas de crímenes recientes en todo el barrio reveló que una sola pistola de 9 mm se había utilizado en 34 asesinatos sólo este año.

Un viernes por la mañana entré en la comisaría de Nueva Prosperina, un edificio mugriento donde los perros callejeros adormilados formaban una carrera de obstáculos en los pasillos. Roberto Santamaría León, el jefe de policía, estaba siendo entrevistado por una cadena de televisión local sobre la última crisis. Las bandas pagaban 20 dólares a los niños para que rompieran las cámaras de vigilancia con cañas de pescar; sólo esa semana se habían roto más de veinte. Santamaría explicó a los periodistas que ya era bastante difícil perseguir a los mafiosos. Sin imágenes de sus delitos, sería prácticamente imposible.



Manta (arriba) fue una próspera ciudad costera. Pero desde los registros de vehículos (centro) hasta los controles (abajo), el narcotráfico condiciona cada vez más la vida de sus habitantes.

En los últimos meses, Santamaría, un hombre musculoso vestido con un uniforme verde oliva perfectamente planchado, ha intentado no sólo luchar contra la pandemia de delincuencia, sino también reconstruir cómo se propagó. Su estrategia consistía en sacar de las calles a cientos de delincuentes -en su mayoría adolescentes acusados de tráfico de drogas- para sonsacarles detalles sobre cómo ganan su dinero. «Esta comisaría hace ganar a las bandas 180.000 dólares al mes», explica Santamaría. «Aquí han construido un Estado paralelo. Igual que usted o yo pagamos impuestos a nuestros países, aquí los residentes pagan impuestos a las bandas». Muchos civiles se ven obligados a hacerlo a través de un sistema de extorsión conocido como la vacuna, llamada así por la dosis de corrupción que inyecta en cada miembro de la sociedad ecuatoriana. Las vacunas pueden exigirse a intervalos mensuales, semanales o incluso diarios, prácticamente a cualquiera: taxistas, propietarios de tiendas, agricultores de cítricos. Independientemente de la víctima o de la cantidad, el objetivo es el mismo: disipar cualquier duda de que la autoridad de las bandas eclipsa a la del Estado.

Según Santamaría, las bandas de Nueva Prosperina favorecen el reclutamiento de niños, que no pueden ser procesados como adultos. «Reclutan a un niño de 12 años. Le dan una casa, un arma y 200 dólares al mes para que les guarde la droga», explica. A los chicos se les pagan otros 200 dólares por trasladar droga de un extremo a otro del barrio, o por asesinar a un miembro de una banda rival; se les pagan 100 dólares si consiguen reclutar a un compañero. Santamaría ha descubierto que los niños ganaban hasta 4.000 dólares al mes por supervisar las operaciones de la banda en Nueva Prosperina. Al cabo de un tiempo, la organización empieza a pagarles en drogas en lugar de en efectivo. La economía local se convierte en un sistema de narcomenudeo, en el que incluso los civiles utilizan bolsas de cocaína como moneda para comprar productos básicos. Por el simple hecho de controlar el barrio, el dinero va a parar a manos de las bandas. «El territorio se convierte en el negocio», me dice Santamaría.

«Reclutan a un niño de 12 años. Le dan una casa, una pistola y 200 dólares al mes para que les almacene la droga».

Otros distritos policiales se centran en frenar el crimen organizado persiguiendo a sus autores. Santamaría sigue una estrategia diferente: lo que él considera «erradicar el problema en su origen». La táctica, me dijo en voz baja, es confiscar las motocicletas de los mafiosos. Sin ellas, los grupos no pueden mover el dinero y la droga con esa velocidad robótica. ¿No pueden comprar motos nuevas? pregunté. Pueden, admitió Santamaría. «Pero hemos ganado tiempo. Y eso es lo que necesitamos ahora».

En un fin de semana de finales de junio, 15 personas fueron asesinadas en Guayaquil y sus alrededores. Las muertes se produjeron a golpe de metralleta, pistola y un par de pandilleros vestidos de policías. El martes siguiente, me desperté con noticias de más derramamiento de sangre. Un video circulaba por WhatsApp. «Tenemos dos muertos más», se oye decir a una voz mientras resuenan disparos en una calle oscura. «¡Señor mío!» Esa mañana, en torno a las 7.30, el domicilio de un fiscal del Estado había sido blanco de dos adolescentes que circulaban en motocicleta. Dispararon varias veces contra un policía antes de huir; el agente

sobrevivió. Ese mismo día, en la zona norte de la ciudad, un sicario disparó a un hombre de 35 años frente a una iglesia; en la zona sur, se descubrió una pila de explosivos en la parte trasera de un restaurante de pollos, probablemente un «taco bomba», compacto y transportable, utilizado como represalia por no haber pagado la vacuna de ese mes. Mientras tanto, en los quioscos de Guayaquil, la portada del diario Extra informaba de la misteriosa muerte de una reina de belleza en un accidente de coche, con insinuaciones de que el accidente había sido un montaje. De ser cierto, se trataría del quinto asesinato de una modelo en los últimos tres años en Ecuador, donde incluso los concursos de belleza se han infestado de crimen organizado: los gánsteres patrocinan a las ganadoras, financian sus carreras y, cuando es necesario, asesinan a quienes responden a sus rivales.

Me dirigí a la morgue de Guayaquil, un edificio situado al borde de una rugiente autopista más allá de la ciudad. A lo largo de la acera, las familias se reunían en lúgubres grupos, esperando para reclamar a sus muertos. Entre ellos había una mujer de pelo rubio y crespo, con unas gafas enormes y una tarjeta de visita colgada del cuello en la que se leía Funeraria Los Jardines Del Edén. Me dijo que se llamaba Yuribis Yolimar y que había emigrado de Venezuela hacía ocho años. Trabajó como cocinera y en un salón de manicura antes de montar una funeraria en 2021. «Ahora hay entre ocho y diez muertes al día», dice Yolimar, y añade que la mayoría son asesinatos. Le pregunté si la guerra entre bandas había sido buena para el negocio. Hizo una pausa. «La verdad es que no. En noviembre me secuestraron». No quiso dar más detalles.

Unos días más tarde, quedé con una mujer llamada Margarita Pardo en un parque de Martha de Roldós, un sucio barrio de Guayaquil. Llegó vestida de negro y con unas gafas de sol que no se quitó en las dos horas siguientes. Nos sentamos en la esquina de un parque infantil mientras ella me contaba, con notable serenidad, una historia atroz.

Dos meses antes, Jesús, el hijo de 19 años de Pardo, salió a pasear por la tarde con su novia Daniela. Al anochecer no habían regresado. A la mañana siguiente, Pardo y los cuatro hermanos de Jesús pegaron carteles por el barrio y pidieron información a sus amigos. Llamaron a hospitales y morgues, aunque se negaban a creer que les hubiera pasado algo malo: la pareja no tenía nada que ver con la delincuencia que asolaba Guayaquil. «Pensamos que aún podrían estar vivos», me dijo Pardo.

Chonillo se ha postulado como el caballero andante contra este arreglo narcopolítico

Un domingo, Pardo recibió una llamada de la policía pidiéndole que se presentara en la comisaría y diera una descripción de Jesús. Allí, describió a los agentes su «pelo rizado y las cicatrices de su cara», que no tenía tatuajes, que «llevaba pantalones de camuflaje y una camisa negra». Al día siguiente, la policía informó a Pardo de que se habían encontrado dos cadáveres. Uno era el de Daniela. El otro era difícil de identificar «porque [estaba] demasiado hinchado para distinguir las cicatrices de la cara». No se indicó la causa de la muerte ni se intentó realizar la autopsia.

Un agente fuera de servicio envió a Pardo una foto de los cadáveres, que fueron descubiertos boca abajo en lo que parecía un pantano. Tres días después, le enviaron otra foto -de un cadáver masculino, con signos de descomposición, sobre una mesa de morgue- y le pidieron

que confirmara la identidad. «Se le caían los labios de la cara», me dijo Pardo, pero no tenía ninguna duda de que era Jesús.

Durante los meses siguientes, Pardo intentó en vano reclamar el cuerpo de su hijo en la morgue de Guayaquil. Una mañana de finales de mayo, Pardo vio en las noticias que un frigorífico de la morgue había dejado de funcionar. Los intentos de volver a congelar decenas de cadáveres licuados habían sido infructuosos; se habían congelado juntos, haciendo casi imposible identificar los cuerpos.

Pardo volvió a la morgue aquella tarde, indignado. «Sólo quería el cuerpo. Y me dijeron: 'No puede tenerlo. Hay gases tóxicos. Y de todas formas no lo quieres. Los cuerpos se han echado a perder. El contenedor lleva roto más de 15 días'».

Durante semanas, Pardo siguió recibiendo negativas. Finalmente, el 13 de junio, seis semanas después de ver a su hijo con vida por última vez, le concedieron permiso para entrar en el contenedor. Dentro, por todas partes, había «gusanos, agua negra y cuerpos en el suelo». Le entregaron una bolsa de plástico blanca que, según le dijeron, contenía lo que quedaba de su hijo. La abrió para asegurarse. «Le salían gusanos de la cara. La carne estaba podrida. Se le veían hasta los huesos. Empecé a sollozar enseguida».





Proteger y servir Roberto Santamaría León (arriba) es el jefe de policía de Nueva Prosperina, una de las zonas más violentas de Guayaquil. En otros lugares de la ciudad, los graffiti señalan la presencia de bandas delictivas (centro)

Al final de nuestra conversación, Pardo apenas podía hablar, pero me pidió que escribiera lo que hacía especial a Jesús. Le encantaba explorar la naturaleza, me dijo. Trabajaba de albañil para mantener a su familia, pero su sueño era ser soldado. Y le encantaba bailar salsa. Su música favorita, dijo Pardo, era el reggaetón. «No quiero que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé», me dijo al salir del parque. Aunque, sin duda, muchos lo han pasado: El cuerpo de Jesús fue uno de los al menos 200 que se pudrieron esta primavera en el congelador roto de la morgue.

A pesar de todo el caos, Guayaquil sigue siendo un lugar más o menos funcional. Banqueros, agentes navieros y funcionarios se dirigen al trabajo cada mañana en sus coches, pasan las tardes en cafés y bares frente al río y envían a sus hijos a la escuela, aunque esté rodeada de muros con alambre de espino. Pero la ciudad de Durán, que se extiende a lo largo de la pantanosa orilla oriental del río Guayas, justo enfrente de las relucientes torres de Guayaquil, es otra cosa: un feudo de la mafia, donde las bandas lo controlan todo, desde la recaudación de impuestos hasta el acceso cotidiano al agua corriente. Las tres cuartas partes de las exportaciones ecuatorianas pasan por Durán, que antaño fue una ciudad en auge para los comerciantes. Desde el río, un manto de tugurios se eleva sobre un tramo monótono de fábricas y almacenes, algunos de los cuales han pasado de albergar verduras y madera a ladrillos de cocaína.

Durán no es un lugar en el que uno deba entrar por casualidad. Una noche, al anochecer, me uní a un batallón de policía que patrullaba la ciudad. Seis camionetas serpenteaban por la oscura mancha urbana. Al cabo de 15 minutos, en un cruce de bulevares, 18 agentes, con pasamontañas y fusiles de asalto, bajaron de las camionetas y establecieron un perímetro de conos de tráfico. Durante la media hora siguiente, hicieron señales a los coches que se acercaban y los iluminaron con linternas. La operación parecía un espectáculo, una coreografía de la fuerza para hacer saber a los ciudadanos de Durán que la policía no les había abandonado totalmente en manos del hampa.

La complicidad con las bandas aumenta los salarios de los recolectores, pero también los pone a merced de los cárteles.

Mientras los coches eran revisados, una teniente llamada Andrea Villacis me contó que los barrios de Durán estaban divididos en pequeñas secciones, cada una de las cuales era vigilada por un civil -un vendedor ambulante, por ejemplo, o un vagabundo- a sueldo de las bandas. «Transmiten detalles de nuestras patrullas y redadas mediante walkie-talkies», explica Villacis, señalando con la cabeza a un grupo que vende empanadas y zumos. «Puede que estén hablando de nosotros ahora mismo».

Las bandas también obtienen información de la propia policía. Los topes identifican a los «miembros más pobres del cuerpo»; los chivatazos se intercambian por dinero. Un mes y medio antes, en un control improvisado a las afueras de Guayaquil, Villacis se quedó atónita al encontrar a un capitán de su unidad en el asiento trasero de un vehículo «repleto de drogas y pandilleros». «Nunca había sospechado nada», me dijo.

Un viernes por la tarde entré en un enorme edificio de cemento en las afueras de Durán y me condujeron a una cámara frigorífica custodiada por cuatro hombres vestidos con armaduras negras. Al cabo de unos instantes, Luis Chonillo -que dirige su ciudad desde una serie de pisos francos secretos- entró en la sala, vestido con una gorra de béisbol y pantalones cargo, sorbiendo café negro de un vaso de espuma de poliestireno. «Soy el alcalde nómada», me dijo Chonillo a modo de presentación.





En el limbo El hijo de Margarita Pardo, Jesús (arriba), tenía sólo 19 años cuando fue asesinado. La morgue de la ciudad (abajo) no devolvió su cuerpo durante meses. Muchos jóvenes están enterrados en los cementerios de Guayaquil (centro).

Cuando asumió el cargo el pasado mes de mayo, Chonillo heredó una administración plagada de conexiones delictivas. Los mafiosos se beneficiaron de casi todos los aspectos del gobierno de Durán, infiltrándose en las empresas de construcción, servicios públicos y gestión de residuos contratadas por las autoridades municipales. Chonillo ha intentado cortar estos lazos examinando las finanzas de las empresas. «Pronto fue posible identificar lo que podríamos llamar un patrón», me dijo. «Por ejemplo, el suministro de agua. Investigué el contrato y empecé a advertir a los medios de comunicación de que tenía problemas. Cuatro días después, el negocio papelerero de mi familia sufrió un atentado con bomba y recibí una carta de una de las bandas: 'Vamos a acabar contigo'».

Tres alcaldes ecuatorianos han sido asesinados este año; otros 30 funcionarios locales han sido objeto de intentos de asesinato. Pero el asesinato de Chonillo sería el premio final para los mafiosos. Una reciente investigación del fiscal general de Ecuador descubrió que docenas de funcionarios del Estado tienen vínculos con las bandas: algunos ofrecen protección frente a la ley, otros ayudan a blanquear el dinero del narcotráfico. Quizá más que nadie en el país, Chonillo se ha postulado como el caballero andante contra este arreglo narcopolítico. «El poder criminal no puede existir sin la ayuda del poder político», me dijo. Por una buena razón está protegido por guardaespaldas armados hasta los dientes, su residencia nocturna no es revelada y su agenda diaria es asiduamente descifrada y vuelta a descifrar. Desde que es alcalde han atentado contra su vida al menos tres veces, una de ellas con dos guardaespaldas y un transeúnte muertos.

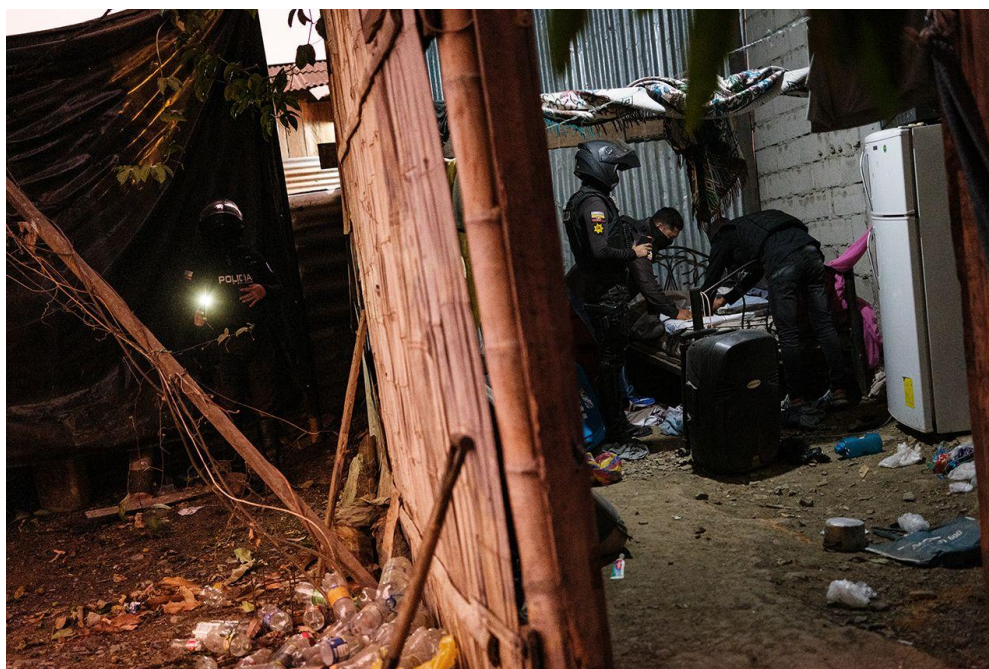
Al final de la mañana, el hombre que denunció los cadáveres había cambiado su versión. Insistió en que no había visto nada.

Le pregunté a Chonillo cuánto tiempo creía que duraría la situación. Hizo una pausa. «Es difícil decirlo. En Colombia, el Estado lleva 50 años librando una guerra contra las organizaciones narcotraficantes. Y todavía queda mucho trabajo por hacer. En México, la lucha dura ya entre 15 y 20 años. Y aún no ha terminado».

En la actualidad, uno de cada tres plátanos que se consumen en el mundo se cultiva en Ecuador. Sería difícil imaginar un vehículo más idóneo para el contrabando de drogas. Dado que los plátanos caducan rápidamente, suelen pasar rápidamente por las aduanas. Y como el gobierno ecuatoriano se ha resistido a invertir en escáneres portuarios, la posibilidad de que los agentes de aduanas detecten un lote de cocaína del tamaño de una maleta soldado al suelo de una caja de acero refrigerada de 30 metros cuadrados -miles de las cuales pasan por los muelles de Guayaquil o Durán cada día- es escasa.

En los últimos cinco años, los inspectores de un puerto tras otro del mundo han abierto contenedores de plátanos ecuatorianos para encontrarse con alijos de cocaína. En agosto de 2023 se descubrieron 9,5 toneladas, por un valor estimado de 800 millones de dólares, en un envío a España, un mes después de que se detectaran 8 toneladas en un cargamento que había llegado a los Países Bajos. Sólo este año se han descubierto grandes alijos en Bulgaria, Georgia, Grecia, Líbano y, una vez más, en España. En las naciones adriáticas de Albania, Croacia y Montenegro -cuyos narcoclanes han comenzado a enviar soldados de infantería a Guayaquil- las importaciones de banano de Ecuador han aumentado desde 2017, a pesar de que el volumen total de las importaciones ha disminuido en el mismo período.

Franklin Torres fue elegido presidente de la Federación Nacional de Productores de Banano de Ecuador hace cinco años. «Nadie más quería el puesto», me dijo en su granja, situada a 130 km al norte de Guayaquil, en la ciudad agrícola de Ventanas. El viaje duró unas tres horas, con pasillos de plataneras a ambos lados del coche, y mi chófer tuvo que acelerar a más de 160 km/h en algunos tramos por miedo a los secuestradores.





The war on drugs During a police raid in Guayaquil, marijuana and “H”, a white heroin-based powder, are discovered (center). Some locals view the police with anger and distrust (below).

La posición de Torres no es envidiable: es la cara pública de una industria que, dentro de Ecuador, está bajo el asalto constante de las bandas y, fuera de Ecuador, es sospechosa de ser una tapadera para el tráfico de cocaína. En el país hay 6.000 propietarios de plantaciones bananeras. Son, si no exactamente aristocráticos, al menos acomodados: Torres, cuya finca tiene unos 80.000 árboles, supervisa la exportación de 8.000 cajas de plátanos a la semana, lo que le reporta varios millones de dólares al año. Para jefes como él trabajan decenas de miles de recolectores, muchos de ellos indígenas o mestizos, que son transportados en autobús de un lado a otro de las plantaciones por una miseria: dos, quizá tres dólares al día.

En la última década, las bandas de Ecuador han alterado la relación casi feudal entre patrón y recolector. Algunos propietarios de plantaciones pasan por alto el contrabando de cocaína en sus cargamentos de plátanos a cambio de una parte de los beneficios. Otros tienen que pagar por protección: Torres me dijo que la vacuna mensual oscila entre 2.000 y 4.000 dólares, aunque se negó a decir si él mismo la paga.

Mientras recorriamos su granja, Torres señaló una constelación de cámaras de vigilancia como prueba de que no está implicado en el negocio de la cocaína. «Todos nuestros cargamentos se graban mientras se cargan», afirma, pasando el dedo índice de una cámara a otra. Cuando se introduce cocaína en los cargamentos de plátanos, suele ocurrir en la estrecha carretera de Guayaquil. Un camión sufre un «pinchazo» y entra en un almacén, donde un cargamento de cocaína se suelda rápidamente en el contenedor. Ocasionalmente se encuentran manteros medio congelados a sueldo de las bandas dentro de unidades refrigeradas que han sido devueltas a las granjas, me dijo Torres.

El año pasado, el presidente de Ecuador prometió aniquilar por la fuerza a los narcotraficantes de su país.

Los recolectores también desempeñan un papel, ya que algunos proporcionan información a los mafiosos sobre los movimientos de los camiones y los horarios de exportación. Complacer a las bandas aumenta los salarios de los recolectores, pero también los pone a merced de los cárteles. Algunos simplemente tienen mala suerte: en la plantación vecina a la de Torres, cinco trabajadores fueron decapitados el año pasado cuando su propietario dejó de pagar una vacuna.

Una semana después de conocer a Torres me dirigí al sur, a El Oro, la más fértil de las tierras bajas de Ecuador, llamada así por el oro que los exploradores españoles encontraron en sus colinas, y un lugar donde las ejecuciones en grupo se han convertido en el pan de cada día. En una plantación tras otra de la región se han ido acumulando los cadáveres de los trabajadores: en los seis meses anteriores a mi visita se habían encontrado más de 30, y 15 sólo en junio. Desde Guayaquil, una cinta de carretera serpentea hacia el sur, un viaje impresionante a lo largo de una costa esmeralda envuelta en una espesa niebla tropical.

Esa mañana llegaron noticias de otra masacre. Poco después de las 5 de la mañana, un contingente de recolectores de plátanos había entrado en la Hacienda La Alcira, una plantación de la polvorienta comunidad de Santa Rosa, para encender las bombas de riego. Se encontraron con los cadáveres de tres hombres tendidos boca abajo en el suelo entre los plataneros, con balas en el cráneo y las muñecas atadas con una cuerda verde.

Un lugareño que había oído los disparos había llamado a la policía. Cuando llegué a Santa Rosa, poco después de las 7 de la mañana, un grupo de agentes se había reunido a unas decenas de metros de los cadáveres, charlando y anotando cosas en sus cuadernos. Los perros callejeros, atraídos por la vista y el olor de los cadáveres, empezaron a acercarse a la escena del crimen, mientras los trabajadores iban llegando a sus turnos.



Fruta amarga Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores de Banano (abajo), ha visto cómo las lucrativas exportaciones de banano de Ecuador se han convertido en un vehículo para el contrabando de drogas.





Un hombre con gorra de los Yankees se detuvo en un ciclomotor que chisporroteaba, con una desbrozadora colgada de las rodillas. Con el rostro inexpresivo, se bajó de la moto y se presentó como Milton Sosa. Era su tercera década trabajando en La Alcira, donde corta la vegetación y embolsa plátanos para «mantenerlos frescos para los extranjeros». Le pregunté si le sorprendía lo ocurrido. Negó con la cabeza, explicando que tres años antes se habían encontrado dos cadáveres en el mismo lugar. «Ahora hay demasiados casos para recordar», me dijo Sosa. «El cadáver que encontraron la semana pasada» -señaló un rincón lejano de la plantación- “era un niño”.

Poco después de las 8 de la mañana llegó un camión frigorífico con sus gordas ruedas chirriando en el barro. Los hombres que llevaban las camillas de acero desaparecieron entre la espesura de los plataneros antes de reaparecer varios minutos después con los cadáveres, las puntas de sus zapatillas sobresaliendo por debajo de la lona negra.

Cuando la policía se marchó, una irresistible corriente de curiosidad arrastró a una docena de lugareños hasta el lugar del crimen. Los lazos de cuerda que habían esposado las muñecas de los hombres habían sido arrojados a un lado; un charco de sangre, de color neón enfermizo contra la tierra marrón húmeda, había empezado a cuajar. «La guerra ha llegado aquí», dijo en voz alta Giovanni Peralta, un comerciante local, a nadie en particular, mientras rodeaba el barro moteado de materia cerebral.

Los manifestantes llevaban pancartas pintadas en sábanas raídas. «¡No a la cárcel!», coreaban. «¡No a la cárcel!»

Al final de la mañana, el hombre que denunció los cadáveres había cambiado su versión. No vio nada, insistió ante un pequeño grupo de periodistas locales, antes de marcharse enérgicamente a su casa.

A medida que aumenta el número de muertos, los ecuatorianos se preguntan si están condenados a una generación de violencia. Aunque muchos expertos han advertido contra una respuesta militarizada al problema de las bandas, en el último año el presidente de Ecuador ha prometido aniquilar por la fuerza a los narcotraficantes de su país. En enero, como parte de su estado de emergencia nacional, Noboa impuso un toque de queda a las 11 de la noche y clasificó a 22 bandas como «organizaciones terroristas»; posteriormente, su gobierno empezó a armar a los soldados con armas incautadas a los mafiosos. Su enfoque sigue el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha presidido una campaña contra las bandas que consiste en encarcelar primero y preguntar después, y que ha incluido la construcción de una prisión de máxima seguridad con capacidad para 40.000 reclusos. Dos años después, la estrategia de Bukele es más conocida por su brutalidad que por su éxito: aproximadamente el 8% de la población masculina joven de El Salvador ha sido detenida. No está claro si Noboa puede imitar eficazmente los esfuerzos de Bukele.

Hacerlo requeriría ignorar la Constitución de Ecuador, mientras que el modelo de negocio de las bandas ecuatorianas -que, dada su implicación en el tráfico de drogas, no depende principalmente de la extorsión, como ocurre en Centroamérica- apunta a un reto más formidable que el que existe en El Salvador: un sistema criminal con bolsillos imposiblemente profundos y al que no le faltan conexiones internacionales.

A finales de junio viajé desde Guayaquil a Juntas del Pacífico, en la región costera de Santa Elena, para ver cómo Noboa anunciaba la construcción de su propia prisión de máxima seguridad. El poco atractivo pueblo, con no más de unas pocas docenas de casas que bordean un camino de tierra lleno de cerdos y aves de corral, estaba en un estado de conmoción sin aliento. En las afueras, el patio de un colegio había sido acordonado con cuerdas. Una carpa blanca había sido instalada; escuadrones de soldados ecuatorianos la flanqueaban en formación de desfile, mientras que otros portando ametralladoras y rifles de francotirador podían ser vistos en las colinas cercanas. Debajo de la carpa, sentados en cientos de sillas dispuestas en filas ordenadas, estaban los residentes de Juntas del Pacífico en sus mejores galas de domingo, mirando una visita simulada de un complejo penitenciario en una pantalla de televisión del tamaño de una valla publicitaria.





Hágase tu voluntad La iglesia de San Vicente, en Guayaquil (arriba, centro), es frecuentada tanto por las víctimas como por los autores de la violencia. Hoy, Margarita Pardo sobrelleva su duelo junto a los hermanos de Jesús (abajo)

A las ocho y media de la mañana, un helicóptero camuflado llegó zumbando desde el este y aterrizó en medio de un campo lleno de matorrales. De él salió Noboa, vestido de negro, con un anillo de oro centelleando en el meñique de su mano derecha. Se dirigió a una pequeña carpa amarilla, donde se había construido con madera contrachapada una maqueta de la futura prisión de máxima seguridad de Santa Elena. Un funcionario local, hablando por un micrófono, explicó al presidente que la prisión sería construida por la China Road and Bridge Corporation. Expertos israelíes formarían al personal y una avanzada tecnología de reconocimiento facial ayudaría a controlar a los 800 presos, gángsters despiadados que serían seleccionados de las abarrotadas prisiones de todo Ecuador. Cuatro cercas de alambre de púas electrificadas rodearían el lugar.

Noboa subió al podio. «Hace siete meses, nuestro sistema penitenciario fue secuestrado y avergonzado por organizaciones criminales que han convertido nuestras cárceles en centros de operaciones», dijo. La nueva cárcel pondría fin a la vergüenza nacional de Ecuador. En diez meses la cárcel estará terminada, aseguró Noboa a la multitud. Juntas del Pacífico se convertiría en un punto de encuentro, bromeó, provocando risitas nerviosas entre los habitantes del pueblo: ¡un punto de encuentro para todos los hombres más peligrosos de Ecuador!

Mientras Noboa hablaba, surgieron gritos de una ladera cercana. Sonrió satisfecho cuando las voces se hicieron más fuertes. Los manifestantes llevaban carteles pintados en sábanas raídas. «¡No a la cárcel!», coreaban. «¡No a la cárcel!» Mientras la policía marchaba para silenciarlos, Noboa concluyó su discurso. Detrás de él, se encendieron un par de excavadoras. Sus operarios empezaron a balancear los cuellos de las máquinas de un lado a otro y luego

hundieron las palas en la tierra mientras sonaba música de baile por los altavoces y los gases de escape se esparcían por el escenario.

Cuando el helicóptero de Noboa se marchó, localicé a uno de los manifestantes. Como muchos residentes de Juntas del Pacífico, Carola Cabrera Villón, trabajadora social de 59 años, tenía raíces indígenas. Su resistencia a la construcción de la prisión no se debía sólo a su creencia de que no contribuiría en nada a resolver los problemas de Ecuador -Villón había pasado tres años como voluntaria en prisiones de Guayaquil, que, según ella, eran «inhumanas»-, sino a que el proyecto tenía en sí mismo un objetivo «colonial». Noboa estaba subcontratando a un rincón fuertemente indígena de Ecuador la tarea de contener la criminalidad que había devastado gran parte del resto del país. «Todos esos problemas que se ven en Guayaquil, ¡vendrán aquí!», me dijo Villón. me dijo Villón. «Es algo sacado de mis pesadillas». Luego estaba el impacto ambiental. La prisión de Santa Elena se construiría a kilómetros de Juntas del Pacífico, en una parcela de selva virgen propiedad de la familia de Villón.

Según ella, el gobierno de Noboa se había apropiado de las tierras sin su consentimiento. «Se negaron a responder a nuestras preguntas sobre lo que estaba ocurriendo», me dijo Villón.

Aquella tarde me dirigí a la ubicación propuesta para la cárcel con Villón y otros activistas, recorriendo una estrecha carretera sin asfaltar que se adentraba en una selva virgen en la que graznaban todo tipo de aves exóticas. Después de media hora llegamos al lugar, donde estaba claro que cualquier intento de terminar la prisión de máxima seguridad en la fecha prevista - en plena campaña de reelección presidencial de Noboa la próxima primavera- requeriría un esfuerzo y una mano de obra inconcebibles. Habría que allanar hectáreas de selva, pavimentar una carretera, conectar la electricidad y transportar decenas de miles de toneladas de hormigón y armadura. Observé cómo Villón y otros hacían lo poco que podían para mostrar su furia contra el plan del gobierno, garabateando «¡No a la cárcel!» en algunos tocones de árbol con pintura azul en spray.

Al cabo de una hora, los activistas y yo volvimos al coche para dirigirnos a Guayaquil, dos horas más al este. Cuando caía la tarde y nuestro coche se acercaba al puerto, mi chófer se volvió hacia mí. «Mientras el presidente Noboa daba su discurso, los miembros de las bandas deambulaban por Juntas del Pacífico», me dijo. «Y debes saber que estaban preguntando cómo comprar alguna propiedad en la ciudad».

Alexander Clapp es un periodista afincado en Atenas. Es autor de *Waste Wars*

FOTOGRAFÍAS: Andres Yopez